

NACIONES UNIDAS
CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



Distr.
GENERAL

E/CN.4/1986/25
29 de enero de 1986

ESPAÑOL
Original: INGLES



COMISION DE DERECHOS HUMANOS
42º período de sesiones
Tema 12 del programa provisional

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Y, EN PARTICULAR, EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES
Y DEPENDIENTES

Nota del Presidente

1. El 19 de octubre de 1984, el Sr. Andrés Aguilar (Venezuela) fue nombrado Representante Especial de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, con arreglo a la resolución 1984/54 de la Comisión de Derechos Humanos. Su mandato fue renovado por la Comisión en su resolución 1985/39.
2. En cumplimiento de su mandato, el Representante Especial ha presentado hasta la fecha un informe preliminar a la Comisión en su 41º período de sesiones (E/CN.4/4/1985/20) y un informe provisional a la Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones (A/40/74).
3. El 3 de enero de 1986, el Representante Especial dirigió una carta al Presidente de la Comisión comunicándole su dimisión en cuanto Representante Especial. El texto de esa carta se reproduce en el anexo I.
4. De conformidad con la petición contenida en la carta del Representante Especial, la Comisión tiene ante sí lo siguiente: a) el informe provisional a la Asamblea General preparado por el Representante Especial en cumplimiento del párrafo 5 de la resolución 1985/39 de la Comisión (A/40/874); b) el texto de la declaración hecha por el Representante Especial cuando presentó el informe provisional a la Tercera Comisión de la Asamblea General el 27 de enero de 1985 (véase el anexo II); c) las actas resumidas de las pertinentes sesiones de la Tercera Comisión de la Asamblea General en que se examinó la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán. Esas actas son las siguientes: A/C.3/40/SR.54, SR.55, SR.60 a 65, SR.67, SR.69 y SR.71.

GE.86-10242

Anexo I

CARTA DE FECHA 3 DE ENERO DE 1986 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE
LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS POR EL SR. ANDRES AGUILAR,
REPRESENTANTE ESPECIAL SOBRE LA SITUACION DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN LA REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN

Tengo el honor de referirme a la resolución 1984/54 de la Comisión de Derechos Humanos relativa a la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán en virtud de la cual fui designado Relator Especial por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. De conformidad con ese mandato, presenté un informe preliminar a la Comisión de Derechos Humanos en su 41º período de sesiones (E/CN.4/1985/20) y, con arreglo a la resolución 1985/39 de la Comisión, presenté un informe provisional a la Asamblea General.

Lamento informarle de que mi Gobierno me ha confiado funciones de representación que, desgraciadamente, me obligarán a cesar, desde el 1º de enero de 1986, mis actividades de Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán.

Infortunadamente no podré cumplir la petición de la Comisión de Derechos Humanos de que le presente un informe definitivo en su 42º período de sesiones. Dadas estas circunstancias y en espera de la asignación de un nuevo representante especial, desearía sugerir que la Comisión examinase lo siguiente:

- a) mi informe provisional a la Asamblea General (A/40/874);
- b) la declaración que hice al presentar ese informe a la Tercera Comisión de la Asamblea General el 27 de noviembre de 1985;
- c) las actas resumidas de las pertinentes sesiones de la Tercera Comisión en que se examinó la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán.

Espero sinceramente que la Comisión pueda así considerar en su justo valor la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán.

(Firmado): Andrés Aguilar

Anexo II

PALABRAS DEL SEÑOR ANDRES AGUILAR M., REPRESENTANTE ESPECIAL
DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS, EN LA OPORTUNIDAD DE LA
PRESENTACION DEL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA SITUACION DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPUBLICA ISLAMICA DEL IRAN

(27 de noviembre de 1985)

Señor Presidente:

Creo conveniente puntualizar, en primer término, que el informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, contenido en el documento A/40/874, de fecha 13 de noviembre de 1985, es el informe provisional que, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 1985/39 de la Comisión de Derechos Humanos tengo el deber de presentar a la Asamblea General en este período de sesiones y recordar que según esta misma resolución, el informe definitivo debe ser presentado a la Comisión de Derechos Humanos en su 42º período de sesiones, que tendrá lugar en Ginebra entre el 3 de febrero y el 14 de marzo del año próximo.

Quiero, enseguida, subrayar que, tal como lo he dicho reiteradamente desde que acepté esta difícil e ingrata misión, he asumido el compromiso de desempeñar este mandato del modo más imparcial y objetivo y me he propuesto hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr la confianza y la cooperación del Gobierno de la República Islámica del Irán.

Esta última consideración es particularmente importante porque, si en verdad se quiere lograr la efectiva vigencia de los derechos y libertades fundamentales en Irán, este objetivo no se puede alcanzar sin esa cooperación. Más aún, la misma tarea de conocer la realidad de ese país en materia de derechos humanos y de evaluar la medida en que la legislación y la práctica son o no conformes con sus obligaciones internacionales, se hace extremadamente difícil si se quiere hacer una investigación seria y objetiva.

En mi ya larga actuación en distintos órganos intergubernamentales de protección de los derechos humanos, de carácter mundial y regional, he podido comprobar -por otra parte- que es necesario y conveniente proceder, en estos casos, de manera gradual y no pasar a pronunciamientos categóricos de censura o de condena sino después de haber agotado todos los medios de persuasión y de llegar a la convicción de que el Gobierno del Estado, cuya conducta se examina, se niega sistemáticamente a cooperar y persiste en una conducta claramente contradictoria con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

No hay que olvidar que, en la actualidad, la única sanción que por regla general trae consigo la violación grave y sistemática de derechos humanos es la publicación del informe o resolución en que se exponen y analizan estas violaciones y se condena al Gobierno responsable de las mismas. En consecuencia, una vez que se llega a esta etapa final, muy poco, o nada, se puede hacer para lograr un cambio en la situación, salvo en contados casos en los cuales es posible imponer otro tipo de sanciones, tales como la exclusión de un sistema regional o de una organización internacional.

Creo conveniente referirme ahora a otro punto muy importante: la cuestión de las facilidades y medios adecuados para realizar un estudio a fondo de la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, tal como lo ha solicitado la Comisión de Derechos Humanos. A mi juicio, el medio más idóneo para lograr este propósito es una visita de observación a ese país, con la posibilidad -desde luego- no sólo de sostener entrevistas con las autoridades competentes en la materia sino también de visitar las prisiones y otros centros de detención y de recibir testimonios e informaciones de todas las personas y organizaciones que desearan hacerlo. Por esta razón, he solicitado reiteradamente la autorización del Gobierno de la República Islámica del Irán para hacer una visita de esta naturaleza, pero lamentablemente, hasta ahora, esta solicitud ha quedado sin respuesta.

Hay, por supuesto, otros métodos de investigar la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán y he utilizado todos los que han estado a mi disposición. Tal como se dice en mi primer informe a la Comisión de Derechos Humanos y en el informe provisional que hay presente, he leído y analizado una muy abundante información escrita procedente de distintas fuentes. He oído, además, las declaraciones de cuantas personas quisieron dar testimonio sobre violaciones de derechos humanos imputadas a las autoridades de la República Islámica del Irán, de las cuales ellas mismas, o sus familiares, habrían sido víctimas o de las cuales tendrían conocimiento por una u otra razón. Es de advertir que en mis informes he incluido solamente las referencias a las alegaciones que han sido ya transmitidas al Gobierno de la República Islámica del Irán para sus observaciones y comentarios. Esto explica por qué en los anexos I y II del informe se mencionan sólo algunos casos de los que aparecen en listas que han sido sometidas a mi consideración, algunas de las cuales, recientemente publicadas han sido distribuidas -según tengo entendido- por las organizaciones responsables de su elaboración, a las delegaciones participantes en este período de sesiones de la Asamblea General.

A este propósito, debo añadir que entiendo que mi papel no puede ni debe limitarse a reproducir sin más las afirmaciones y alegatos que aparecen en estos escritos y resultan de esos testimonios. Creo, en efecto, que el Gobierno de la República Islámica del Irán -como el de cualquier país, cuya conducta en materia de derechos humanos sea objeto de examen por un órgano internacional intergubernamental- debe tener la posibilidad de conocer los alegatos que se hacen en su contra y de presentar oportunamente sus observaciones o comentarios al respecto. Tiene, en otras palabras, el derecho a ser oído. Sólo así puede depurarse una prueba que si bien, por razones obvias, no puede estar sujeta a las limitaciones que en materia de admisibilidad de pruebas establecen las leyes de procedimiento de casi todos los países, debe ser suficiente, al menos, para que el órgano que estudia el asunto pueda razonablemente llegar a conclusiones.

Por esta razón, tal como se explica en este informe provisional, he dado traslado al Gobierno de la República Islámica del Irán de aquellos alegatos que contienen información suficientemente precisa sobre la naturaleza de la violación, el nombre -o nombre- de las presuntas víctimas y las circunstancias de lugar y de tiempo en que habrían ocurrido, porque sólo con estas precisiones puede el Gobierno dar respuestas igualmente concretas y precisas en un plazo razonable.

Lamentablemente, tal como se dice en el párrafo 15 del informe provisional, el Gobierno de la República Islámica del Irán no ha dado respuesta alguna a las preguntas concretas que se hacen en el aide mémoire que aparece como anexo III de este informe y a las denuncias concretas y detalladas que se reproducen en los anexos I y II acerca de ejecuciones sumarias y arbitrarias y el fallecimiento de personas a consecuencia de malos tratos. También ha quedado sin respuesta, tal como se dice en el mismo párrafo 15 del informe provisional, la carta de fecha 29 de agosto de 1985, dirigida al Representante Permanente de la República Islámica del Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, en la cual solicité información detallada sobre las denuncias formuladas ante mí por varias personas sobre diferentes aspectos de la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán.

Este silencio, de prolongarse, permitiría presumir la veracidad de los hechos denunciados pero, como es posible que antes de la elaboración del informe final se reciban las informaciones solicitadas, me he limitado a decir en el párrafo 15 del informe provisional que estoy obligado a llegar a la conclusión de que no se pueden rechazar tales denuncias por falta de fundamento, a menos que se pruebe que así es mediante informaciones detalladas que el Gobierno está en mejores condiciones que nadie para reunir o suministrar. Dar por probados todos estos hechos en esta etapa sería una solución fácil y cómoda a un problema tan delicado y complejo como el que nos ocupa. Sin embargo, consecuente con el propósito que me he trazado de mantener el diálogo apenas iniciado con el Gobierno de la República Islámica del Irán y de estimular su cooperación, me he limitado a señalar tan sólo las consecuencias que tendría inevitablemente una reiterada negativa de ese Gobierno de colaborar en el esclarecimiento de estos hechos. Por todo lo dicho y para concluir esta exposición, quisiera reiterar mi llamamiento a la República Islámica del Irán para que fortalezca su cooperación con el Representante Especial y la Comisión y continúe el diálogo apenas iniciado, en pro de la normalización de la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán.
